

BOLETIN

DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA.

LEGISLACION.

JULIO.

113. **HACIENDA.**—En 1.º—*Representacion de la misma en juicio.*—Real decreto.—Art. 1.º Los abogados fiscales de las subdelegaciones de rentas serán los únicos representantes de la hacienda pública en los negocios judiciales de toda clase que en las mismas subdelegaciones se instruyan.—Art. 2.º En su consecuencia toca á dichos funcionarios: 1.º Poner y sostener las demandas civiles y criminales de interés de la hacienda pública. 2.º Defenderla siempre que se intente alguna reclamacion civil contra ella. 3.º Intervenir, con arreglo á derecho, en todas las causas de contrabando, defraudacion ó de cualquier otra especie, ya se principien de oficio ó á virtud de denuncia ó de aprehension hecha por los agentes de la fuerza ó administracion pública. 4.º Gestionar ante las mismas subdelegaciones todo cuanto exijan la defensa y los intereses de la hacienda.—Art. 3.º Los abogados fiscales representarán tambien á la hacienda en los consejos provinciales cuando funcionen como tribunales administrativos, en los juzgados de marina y otros, escepto los de comercio, siempre que la hacienda sea parte ó se practiquen diligencias en que tenga interés ó deba ser oida ó representada, á no ser en los casos en que, con arreglo á las leyes, toque esta representacion á los promotores de los juzgados ordinarios. Los promotores fiscales de los tribunales de comercio representarán ante ellos á la hacienda, entendiéndose con la direccion de lo contencioso en todo lo tocante al mismo ramo. Los promotores fiscales de los juzgados ordinarios de primera instancia, cuando en los pueblos de su residencia no haya juzgado de hacienda, la

representarán en todo, escepto en lo relativo á partícipes legos en diezmos, en lo cual se practicará lo que está mandado. Respecto de la representacion de la hacienda en los demás juzgados de otro fuero que se encuentren en el caso indicado, nombrarán los gobernadores de las provincias, á propuesta de los abogados fiscales de la subdelegacion, letrados que reúnan las circunstancias apetecidas al intento. Sin embargo, en caso de urgencia calificada podrá nombrarse el representante por los mismos juzgados, dando cuenta inmediatamente al gobernador de la provincia.—Art. 4.º Los abogados fiscales dependerán inmediatamente de la direccion general de lo contencioso, sin perjuicio de la inspeccion y vigilancia que debe ejercer el fiscal del consejo Real en los negocios contencioso-administrativos que se traten en los consejos provinciales, la que compete al del tribunal mayor de cuentas, é igualmente la que corresponde á los fiscales de las audiencias territoriales, gefes naturales de aquellos y defensores natos de la hacienda, bajo la dependencia del fiscal del tribunal supremo en todo lo tocante á la administracion de justicia en las subdelegaciones de rentas, juzgados y tribunales ordinarios.—Art. 5.º El Gobierno, sin embargo, podrá encargar á un letrado particular la defensa de la hacienda en determinados negocios, sea en la primera ó en las ulteriores instancias, siempre que lo estime oportuno y lo exija la gravedad, importancia y trascendencia del asunto. A estos letrados, que sustituirán en todo á los fiscales y promotores en el negocio que se les encargue, se les satisfarán sus honorarios, á cuyo fin se reclamará de las córtés en el capítulo y artículo correspondiente del presupuesto próximo el crédito necesario. Si entre tanto ocurriese algun gasto de esta clase, se decretará el crédito conveniente en la forma prevenida por la ley de 20 de Febrero último.—Art. 6.º La designacion de letrados se hará por la direccion de lo contencioso una vez reconocida su necesidad ó conveniencia por el Gobierno.—Artículo 7.º Los administradores de la hacienda pública en las provincias agitarán los negocios judiciales correspondientes á su respectivo ramo, dando conocimiento á la direccion siempre que los abogados fiscales de las subdelegaciones, ó los letrados defensores en su caso, no manifiesten todo el celo que deben. Además de los abogados fiscales serán responsables los administradores, siempre que éstos no acrediten haber gestionado convenientemente con

aquellos para el debido despacho de los negocios.—Art. 8.º Los gobernadores además nombrarán un empleado subalterno de cualquiera de las dependencias de hacienda en que haya subdelegacion de rentas, con la denominacion de *agente judicial de hacienda*, para que desempeñe las funciones propias de los agentes llamados de negocios, y las que en concepto de tales egercen los procuradores de los juzgados y tribunales. Estas funciones se desempeñarán en Madrid por el agente llamado de pleitos, que dependerá inmediatamente de la direccion de lo contencioso. Los demás dependerán de los gobernadores de provincia y de los administradores, gefes de los respectivos ramos, y estarán á las órdenes de los abogados fiscales en todo lo tocante á su oficio.—Art. 9.º El agente de pleitos de la direccion de lo contencioso, y los judiciales de hacienda residentes en capitales de audiencia territorial, promoverán respectivamente los negocios que penden en los tribunales supremo ó superiores, llevando al intento la debida correspondencia con los abogados fiscales de hacienda, administradores de los ramos y agentes inferiores de ella, presentándose diariamente al fiscal de dichos tribunales ó á sus abogados á recibir sus órdenes, á fin de practicar las diligencias que les encarguen, y cuanto tenga á bien ordenarles en el interés de la hacienda, y para saber el estado y progreso de los negocios.—Art. 10. Los agentes judiciales de las provincias serán atendidos para sus adelantos en la carrera, sin perjuicio de la recompensa á que se hagan acreedores por su comportamiento, en cuanto lo permita el crédito que para gastos judiciales se abra en la ley de presupuestos.—Art. 11. Cuando los gefes de la administracion provincial juzguen procedente una accion judicial por parte de la hacienda, pasarán el espediente íntegro al abogado fiscal para que lo examine y proceda á lo que corresponda, dando conocimiento al propio tiempo á la direccion de lo contencioso.—Art. 12. Antes de intentar demanda ó contestar á la que se pusiese á la hacienda, los abogados fiscales consultarán con dicha direccion por conducto del fiscal de la audiencia territorial, pudiendo proceder sin embargo á presentarla ó contestarla cuando el negocio sea leve, ó aunque grave, esté bien calificada la urgencia, sin perjuicio de dar parte circunstanciado y sin demora á la misma direccion y al fiscal de la audiencia.—Art. 13. Las actuaciones y notificaciones judiciales se entenderán siempre con los abogados fiscales, quienes incur-

rirán en la responsabilidad que proceda por omision ó por falta de celo.—Art. 14. Siempre que los fiscales del tribunal supremo de justicia, del consejo Real y de las audiencias no estimen procedentes las pretensiones de la hacienda en que ellos mismos hayan de defenderla, lo harán presente oportunamente al Gobierno por la via reservada para que se disponga lo mas conveniente.—Art. 15. Los asesores de las subdelegaciones de rentas se limitarán en adelante al despacho de los negocios judiciales. Los gobernadores oirán en los asuntos gubernativos económicos á los abogados fiscales ó á los consejos provinciales, siempre que lo estimen conveniente, ó cuando por las instrucciones vigentes deban ser oidos los asesores.—Art. 16. Hasta que tenga efecto el arreglo definitivo de la jurisdiccion de hacienda que está anunciado, no se sacarán á subasta las escribanías de los juzgados de las subdelegaciones de rentas que vacaren. La direccion de lo contencioso nombrará sugetos idóneos que sean ya escribanos ó notarios, y estén adornados de las circunstancias apetecidas, para que las sirvan interinamente con las condiciones que se les impusieren. Los oficios enagenados por la corona se proveerán como hasta aquí.

116. **HACIENDA.**—En 1.º—*Contribucion industrial y de comercio.*—R. D. reformando los art.º 6.º, 7.º, 24 y 47 del R. D. de 3 de Setiembre de 1847 y fijando nuevas tarifas.—Dichos artículos reformados se leerán como sigue:—Art. 6.º La clasificacion de poblaciones se hará desde luego por el último censo formado, tomando como base de su vecindario la poblacion del casco del pueblo y la que se encuentre diseminada dentro del término municipal á menor distancia que la de dos mil varas castellanas, contadas desde la última casa del mismo casco del pueblo por el camino ó senda practicable mas corta. Los establecimientos situados á mayor distancia de dos mil varas del pueblo solo estarán sujetos al derecho minimo fijado á las respectivas clases en aquellos que tengan de 500 vecinos abajo. Las clasificaciones podrán rectificarse á instancia de la administracion ó de los pueblos, ejecutándose las operaciones por agentes de la misma, con asistencia de los individuos de los ayuntamientos que éstos elijan, y sus resultados serán sometidos á la aprobacion del Gobierno. En el caso de que la rectificacion haga subir á un pueblo de una clase inferior á otra superior, el aumento del derecho solo se exigirá desde 1.º de Enero del año

inmediato al en que se haya hecho por el Gobierno la correspondiente declaracion, si esta hubiera tenido lugar antes de 1.º de Noviembre. Si la declaracion es posterior, el aumento del derecho se exigirá, no desde 1.º de Enero del año mas próximo, sino del siguiente. Este mismo orden se observará para la baja del derecho cuando los pueblos hayan de descender de clase.—Art. 7.º El individuo que se ocupe por sí ó por sus dependientes en dos ó mas industrias, profesiones, artes ú oficios de las que se espresan en la tarifa núm. 1.º, contribuirá con la cuota que á cada una corresponda, aunque las egerza en un mismo edificio. El que en un solo edificio tenga dos ó mas tiendas separadas con puertas abiertas para la venta al público, aunque se comuniquen por lo interior del edificio, queda sujeto al pago de las cuotas que habrán de imponérsele como si las tiendas estuviesen establecidas en distintos locales. El que se inscriba en la matricula como almacenista de la tarifa 1.ª, ó como comerciante de los comprendidos en la 2.ª, no está obligado al pago de dos ó mas cuotas por los diferentes depósitos ó almacenes separados en que conserve los granos, caldos, géneros ó efectos de su comercio, con tal de que no se hallen abiertos para la venta al público. Si lo estuvieren, deberá satisfacer independientemente la cuota que corresponda á cada uno por el comercio ó especulacion que egerza en ellos. A los individuos que dentro de un mismo almacén ó tienda vendan géneros, frutos ó efectos pertenecientes á dos ó mas industrias de las comprendidas en las ocho clases que abraza la espresada tarifa, se les impondrá solamente la cuota mayor respectiva á la clase mas alta de las que constituyan su comercio, si bien los peritos tomarán en cuenta al hacer el reparto ó categorizacion gremial todos los productos que obtenga el interesado en su establecimiento. Los derechos que se fijan á las industrias comprendidas en la tarifa núm. 2.º se exigirán por separado, aun cuando se egerzan diferentes en un mismo local, ó juntamente con las de las otras dos tarifas. Lo mismo se egecutará respecto á los señalados á las industrias de la tarifa núm. 3.º Quedan sin embargo esceptuados los fabricantes de pagar cuota por la venta de los productos de sus establecimientos, aunque lo verifiquen en local separado de ellos, siempre que este se halle situado en la misma poblacion y los vendan por mayor. Si los vendiesen al por menor serán considerados

como mercaderes, y satisfarán la cuota que marca á esta clase la tarifa núm. 1.º, independientemente de la que señala la del número 3.º á las máquinas y artefactos.—Art. 24. Los clasificadores distribuirán por categorías el cargo formado al gremio respectivo, y señalarán á cada individuo la cantidad que ha de satisfacer, siempre que ninguna esceda del quintuplo de la cuota de tarifa ni baje de la quinta parte de ella. En consecuencia los individuos de cada gremio serán responsables colectivamente al pago de las cuotas que componga su cargo; pero como dentro del año puede dejar alguno de pertenecer al gremio por fallecimiento, insolvencia ú otra causa que motive su cesacion en el egercicio de la industria, profesion ú oficio, en tal caso, justificado este extremo, será partida fallida para la hacienda y descargo para aquel la que resulte en prorata desde el dia de la cesacion del industrial hasta 31 de Diciembre, tomando por base para la liquidacion la cuota de tarifa, sin perjuicio de hacer cargo ó bonificacion al gremio del déficit ó superavit que aparezca cuando la cuota señalada al individuo en el repartimiento fuese mayor ó menor que la de tarifa. Los resultados de estas liquidaciones, sean en favor ó en contra del gremio, se tendrán en cuenta al formarle el cargo en el año inmediato, para que produzca efecto al egercutar el repartimiento entre los agremiados anteriormente.—Art. 47. Todo el que egerza una industria, comercio, profesion, arte ú oficio de los sujetos á esta contribucion sin haber obtenido préviamente el certificado de matrícula en que conste hallarse inscrito en el registro de su clase, será desde luego privado de dicho egercicio hasta que pague una multa que no baje del duplo ni esceda del cuádruplo de la cuota que por un año señale la tarifa á su industria ú oficio, y además las cuotas que haya devengado y dejado de satisfacer en el espacio de dos años, por no ser exigible de mas tiempo cuando no se hubiesen reclamado antes. La imposicion de la multa corresponde á los gobernadores de provincia, á propuesta de las administraciones, en vista del espediente que deben formar é instruir las mismas por sus agentes comisionados para justificar el fraude. Si los interesados no se conforman con el acuerdo de los gobernadores, podrán acudir ante el juzgado de la subdelegacion de rentas en término de doce dias, contados desde el en que se les hubiese hecho saber dicho acuerdo; pero para ser oidos deberán consignar el importe de la multa ó

presentar un fiador á satisfaccion del administrador, pasándose al juzgado cualquiera de ambos casos en el espediente gubernativo. Estos recursos serán considerados como pertenecientes al contencioso-administrativo, y en ellos no se dará apelacion produciendo egecutoria la decision que recayere. Las cuotas que por contribucion correspondan á la hacienda deberán cobrarse desde luego por los medios establecidos. El importe de las multas que quedaren definitivamente impuestas se aplicará íntegro al tesoro; y por el mismo se abonará solamente una tercera parte al denunciador ó agente investigador si le hubiere. En ningun caso serán los gefes y empleados partícipes de las multas, aunque se impongan por efecto de las visitas de inspeccion que giran en los pueblos para investigar y descubrir los fraudes y ocultaciones. Las administraciones llevarán un registro de los espedientes de denuncias, y anotarán en él la liquidacion de las multas y todos los incidentes que ocurran hasta su solvencia.

117. JUSTICIA.—En 5.—*Bienes de capellanías.*—Real órden.—En los pleitos de capellanías de sangre como en las de patronatos, se tenga por parte á los promotores fiscales y á los fiscales en las audiencias; se entiendan en ellos todas las diligencias y actuaciones; pero los promotores no deduzcan pretension alguna hasta despues de publicadas las pruebas, en cuyo caso, si encontrasen que los litigantes no tienen derecho á los bienes de la fundacion, bien por los términos de ésta, bien porque el parentesco alegado no esté comprobado, hagan la pretension que convenga á los intereses de la hacienda, y de lo contrario devuelvan los autos sin oposicion pero precediendo consulta con el fiscal de la audiencia para que, en el caso de que el asunto termine en primera instancia, no quede solo decidido con la opinion del promotor. Que á los fiscales en las audiencias se les comuniquen dichos pleitos despues que las partes hayan alegado, y antes de sentencia, y entonces, arreglándose á lo que queda dicho con respecto á los promotores egecuten lo mismo que á estos se previene con respecto á la oposicion que deba hacerse ó devolucion de los autos sin despacho.

118. En 6.—COMERCIO.—*Minas.*—R. O. sobre la inteligencia del art. 4.º de la ley de 11 de Abril de 1849 sobre minas.—Al Reglamento de 31 de Julio de 1849 para la ejecucion de la ley de mi-

nas se adicionan las reglas siguientes: 1.^a No se concederá registro ni denuncia de pertenencias de arenas auríferas hasta que los solicitantes hayan construido establecimiento fijo en donde poder beneficiarlas, entendiéndose por tal los edificios con los aparatos necesarios para beneficiar en ellos á lo menos cuatrocientos quintales de arenas al dia, sea cualquiera el método adoptado; debiendo el ingeniero del distrito certificar la posibilidad de su egecucion. 2.^a Interin no se halle construido el establecimiento fijo y en disposicion de funcionar, continúa siendo de libre aprovechamiento el terreno registrado en los propios términos que el que no lo esté, escepto aquella parte que el ingeniero del Gobierno, comisionado para el reconocimiento, conceptúe estrictamente necesario señalar para el objeto espresado en la regla anterior, si al peticionario conviniere establecer sus oficinas de beneficio en el punto registrado para la explotacion. 3.^a El derecho de prioridad al terreno registrado corresponde al primero que lo haya solicitado. 4.^a Se concederá á los registradores como máximum el término de un año para la construccion del establecimiento fijo y dar principio al beneficio; en la inteligencia que de no cumplir ambos extremos en aquel período, se pierde el derecho, pudiendo adquirirlo el inmediato registrador ó solicitante. 5.^a No puede adquirir derecho á beneficiar arenas ó aluviones auríferos, ni pretender prioridad, el minero que obtenga ó haya obtenido concesion para otra clase de minerales en la proximidad de las arenas ó aluviones, que deben considerarse independientemente segun la ley de los criaderos implantados en roca firme. 6.^a La estension de una pertenencia para explotar arenas auríferas será en lo sucesivo de 50,000 varas superficiales, que podrán designarse en forma de un cuadrado ó rectángulo, ó bien por la reunion de cuadrados de 25 varas castellanas de lado cada uno, adoptados unos ú otros sin dejar espacios cerrados intermedios, y acomodándolos del modo que mejor convenga á los interesados, quienes deberán espresarlo en la designacion, acompañando por duplicado el plano que demuestre su posicion y la topografia del terreno, con inclusion de las pertenencias colindantes, si las hubiere, ó espresion terminante de lindar con terreno franco, cuyos planos deberán remitirse á la aprobacion en los propios términos que se egecuta con las de escoriales y terreros. 7.^a Estas disposiciones no son obligatorias á los que tuvieren concesiones anterio-

res á la promulgacion de la ley de 11 de Abril de 1849, que continuarán como hasta aquí y sin opcion á la mayor amplitud que se concede á las pertenencias sobre mantos ó placeres auríferos: 8.^a Para la instruccion de los espedientes en solicitud de terrenos auríferos y construccion de fábricas de beneficio sin contravenir las disposiciones que anteceden, se llenarán todas las formalidades prescritas en la ley y reglamentos vigentes para los registros y denuncias sobre las demás clases de criaderos, como asimismo respecto de las oposiciones y contradicciones que acerca de ellos se hiciesen.

119. GOBERNACION.—En 13.—*Imprentas.*—R. O. prohibiendo circulen y mandando se denuncien los impresos siguientes: 1.^o Los que vayan encaminados á destruir la organizacion social y el principio y forma de Gobierno establecido en la constitucion del Estado, aunque solo sea haciendo consideraciones abstractas ó aplicaciones á naciones estrangeras. 2.^o Los impresos en que se entable discusion respecto á la Real persona de S. M. la Reina, de S. M. el Rey, de cualquiera otro individuo de la Real familia, y contra el libre egercicio de las régias prerogativas. 3.^o Los que traten de actos de la vida privada ó sobre la historia de alguna persona ó familia sin consentimiento de los interesados, ó en su defecto de los parientes dentro del cuarto grado. 4.^o Los que contengan doctrinas dirigidas á relajar los lazos sociales, á atacar la propiedad, á vulnerar la religion del Estado ó á ofender las buenas costumbres, ora se publiquen en folletines de periódicos, ora en folletos ó libros. 5.^o Los que sin editor responsable y sin haber llenado las formalidades que la ley previene traten de materias políticas y administrativas, ó de los actos del Gobierno ó de los funcionarios públicos. Sin contemplaciones ni miramientos de ninguna especie, porque primero es el interés de la sociedad que el de los particulares, y porque no merecen la menor consideracion los intereses bastardos, se escitará el celo y el deber del ministerio fiscal para que entable la accion que corresponda con el objeto de impedir los abusos de la imprenta en los puntos que quedan indicados. Al mismo tiempo se procurará que el ministerio fiscal persiga de oficio las injurias contra los funcionarios públicos, ya sean relativas á los actos de su vida privada, ya consistan en la suposicion de malas intenciones que se atribuyan á sus actos ofi-

ciales. El ministerio fiscal entable la accion que corresponda con el objeto de impedir los abusos de la imprenta en los puntos que quedan indicados; y persiga de oficio las injurias contra los funcionarios públicos, ya sean relativas á los actos de su vida privada, ya consistan en la suposicion de malas intenciones que se atribuyan á sus actos oficiales.

120. **HACIENDA.**—En 16.—*Reconocimiento de efectos.*—Atribuciones en el mismo del cuerpo de carabineros y de la Administracion de aduanas.—R. O.—1.^a Con arreglo al art. 14 del reglamento de 18 de Marzo de 1850, la fuerza de carabineros destinada al servicio interior ó exterior de una aduana está obligada á obedecer en lo relativo á dicho servicio las prevenciones del administrador, el cual responderá de ellas ante sus respectivos superiores. 2.^a El administrador, en virtud de sus facultades ó de las órdenes superiores que tuviese, determinará el local en que hayan de hacerse los reconocimientos, el cual, aun cuando esté fuera del edificio de la aduana, se considerará como parte de ella, el modo cómo hayan de hacerse dichos reconocimientos y las personas que hayan de verificarlos é intervenirlos. 3.^a No se admitirán denuncias de efectos presentados por los conductores en los puntos establecidos para el reconocimiento, y solo tendrán lugar aquellas, ó antes de haberse presentado en dichos puntos, ó despues de haber salido de ellos. Estas denuncias se harán siempre por escrito y bajo la responsabilidad legal que contrae el denunciador, y se admitirán por los administradores de aduanas, procediéndose al reconocimiento á presencia del interesado y del denunciador. 4.^a El resguardo no podrá proceder por sí al reconocimiento por sospechas de fraude ó contrabando de ningun bulto cerrado, sino que lo presentará en la administracion de rentas del pueblo inmediato al lugar de la detencion. 5.^a Las aprehensiones que se verifiquen por la fuerza del resguardo antes de haber llegado los efectos á los puntos de reconocimiento, ó despues de haber salido de ellos, están comprendidas en la regla 3.^a de la Real orden de 24 de Abril último, y su conocimiento por tanto pertenece al tribunal de hacienda; pero no las que se realicen en los puntos destinados á los reconocimientos en las cuales se seguirán los trámites que previene la regla 2.^a de la misma Real disposicion.

121. **HACIENDA.**—En 18.—*Hipotecas.*—R. O. sobre pago.

de derechos de hipotecas causados por escrituras de transaccion verificadas al disputarse los de propiedad de cualquiera finca.—Regla 1.^a—En las transacciones sobre bienes inmuebles litigiosos debe satisfacerse por aquel ó aquellos á quienes se ceden el tanto por ciento de derechos de hipotecas que correspondan segun sea el título de la última adquisicion ó causante derecho. 2.^a Si dichos bienes se repartiesen entre las partes litigantes y convenidas por la transaccion satisfaga cada una lo que corresponda á la parte respectiva adjudicada. 3.^a En el caso de que todos los bienes queden adjudicados á una ó mas personas y esta dé á la otra parte litigante alguna cantidad ó precio, se deduzca este del en que consistan los inmuebles adjudicados para el efecto de la exaccion hipotecaria. 4.^a Cuando el título de la adquisicion que dió lugar el litigio y sobre que ha recaído la transaccion proceda de herencias, se consideren como habidas entre estraños para exigir y deducir asimismo los derechos de hipotecas.

122. **HACIENDA.**—En 18.—*Fincas de monasterios y conventos.*—R. O. concediendo á los colonos de fincas procedentes de monasterios y conventos el improrogable término de seis meses desde la fecha para acreditar el derecho á conservar el dominio útil de las mismas, segun la ley de 31 de Mayo de 1837; y mandando que á los que la hayan verificado ó lo verifiquen se les otorgue por los administradores de fincas escritura de reconocimiento de dominio.

123. **HACIENDA.**—En 22.—*Algodon hilado.*—R. O.—El adeudo del algodón hilado de los números que son de permitido comercio, y que se presente arrollado en carretas de madera ó metal, se verifique rebajando por tara un 40 por 100 del peso total.

124. **COMERCIO.**—En 23.—*Buhonería.*—R. O.—Se declara libre en todo el reino la venta de lienzo, paños y efectos de buhonería en puestos ambulantes por las calles, en los términos prevenidos por las Reales órdenes de 26 de Noviembre de 1842 y 12 de Abril de 1843, siempre que los que á esta industria se dediquen llenen los requisitos prevenidos por las leyes y disposiciones vigentes.

125. **HACIENDA.**—En 23.—*Apremios á contribuyentes.*—R. O.—Art. 1.^o La facultad de espedir los apremios contra primeros contribuyentes de que trata el art. 87 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845 compete á los administradores en las capitales de

provincia y en los pueblos cabeza de partido administrativo, con aprobacion simultánea ó prévia de los gobernadores, en cuyo nombre los espedirán, y en todos los demás pueblos á los alcaldes presidentes de los ayuntamientos, ya se haga la cobranza por cuenta de éstos, ya de la hacienda; entendiéndose que esta facultad se ha de egercer en los términos y bajo las reglas que contienen los artículos 66 del propio Real decreto, y 39 y 40 de la instruccion de cobradores de 5 de Setiembre 1845.—Art. 2.º En la papeleta de que habla el art. 61 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845 se expresará la cuota anual de contribuciones y cantidades adicionales con que cada individuo se halle inscrito en la lista cobratoria sacada del repartimiento, y los plazos en que respectivamente deberá egecutarse. La papeleta se estenderá por los recaudadores con referencia á las mismas listas y con el visto bueno de los administradores en las capitales de provincia y en los pueblos cabeza de partido administrativo, y del alcalde en los restantes, y se repartirá entre todos á domicilio por los agentes del recaudador. A los contribuyentes forasteros que no tengan colono ni encargado en el pueblo se les remitirán por conducto de los alcaldes de los pueblos en que residan. Las papeletas que no puedan ser repartidas se devolverán á la administracion ó al alcalde en su caso para que conste la razon porqué no han sido entregadas á los respectivos interesados. Al principiar y concluir la distribucion de papeles se anunciará en los *Boletines oficiales*, para que el contribuyente que no reciba la que le sea respectiva pueda reclamarla de la autoridad correspondiente.—Art. 3.º Antes del vencimiento del plazo señalado para la cobranza de las cuotas de cada uno de los cuatro trimestres del año, los recaudadores harán insertar los oportunos anuncios en los *Boletines oficiales* de la capital de provincia, y fijarlos en los parages públicos y de costumbre en los demás pueblos, invitando á los contribuyentes á que dentro del plazo marcado por instruccion verifiquen el pago de sus respectivas cuotas en los puntos que los mismos recaudadores designarán, de acuerdo con las respectivas autoridades, escepto en las capitales de provincia, en que la cobranza se hará á domicilio, segun está mandado, evitando de este modo que el primer aviso que reciban los contribuyentes sea el apremio de primer grado.—Art. 4.º Los apremios de primero y segundo grado se comprenderán en lo sucesivo en un solo despacho

que deberá espedirse el día 6 del segundo mes de cada trimestre. El apremio de primer grado se concretará á imponer á cada contribuyente moroso el recargo de 4 mrs. en real de los que constituyan su total débito, lo cual se participará por el egecutor al interesado al tiempo de entregarle la papeleta de que trata el art. 69 del espresado Real decreto, en los términos y bajo las formalidades que el mismo dispone, estendiendo de ello la oportuna diligencia para los efectos subsiguientes. El de segundo grado, ó sea el de egecucion con venta de bienes muebles, tendrá lugar al cuarto día de entregada la papeleta del primero, si el contribuyente no satisface su débito con arreglo á los trámites establecidos en las disposiciones del citado cap. 7.º, sin perjuicio de continuar despues, si fuese necesario, el del tercer grado para egecutar los inmuebles ó raices, en caso de acordarlo así el ayuntamiento, conforme á la facultad que le concede el art. 83 del propio Real decreto.—Art. 5.º Deja de ser colectiva la obligacion de los primeros contribuyentes al pago de las dietas y costas de los apremios de segundo y tercer grado, y en su lugar se establece la individual como en el del primer grado, en esta forma: Se exigirá á cada contribuyente en el apremio de segundo grado, además del recargo de 4 mrs. en real sobre débitos.

Desde	1 á 1000 reales el....	10 por 100.
	de 1001 á 3000..... el....	6 por 100.
	de 3001 á 5000..... el....	4 por 100.
	y de 5001 en adelante.. el....	2 por 100.

En el apremio de tercer grado se exigirá sobre los recargos correspondientes al 1.º y 2.º,

Desde	1 á 1000 reales el....	5 por 100.
	de 1001 á 3000..... el....	3 por 100.
	de 3001 á 5000..... el....	2 por 100.
	y de 5001 en adelante... el....	1 por 100.

Art. 6.º Los recargos que se imponen por cada uno de los tres referidos apremios se devengan y son exigibles desde el momento, y no antes, en que el egecutor los notifique á los respectivos interesados, segun el órden gradual en que deben egercerse.—Artículo 7.º Los espresados recargos pertenecen esclusivamente á los egecutores, obligados, como lo quedan, á llevar adelante y terminar los tres apremios; pero no se les entregarán, ingresando y

permaneciendo entre tanto en poder de los recaudadores, hasta que se halle realizado el pago del débito y concluido el procedimiento; dando para ello la administracion luego que examine y apruebe los expedientes, la oportuna orden el recaudador.—Art. 8.º Será obligacion del egecutor satisfacer las dietas que se devenguen por los auxiliares y peritos de la comision, así como los derechos del papel del despacho y cualesquiera otros gastos que en ella se ocasionen, bajo el concepto de que los contribuyentes no deben pagar por los apremios otra cantidad que los de los recargos espresados.—Artículo 9.º El intendente de Madrid y los administradores de provincia y de partido no espedirán en lo sucesivo otros apremios de primero, segundo y tercer grado contra primeros contribuyentes que los que se hallen dentro de los casos marcados en este Real decreto, y los que se consideren indispensables para realizar los descubiertos procedentes de contratos celebrados por los deudores en la administracion de la hacienda pública ó de ramos ó impuestos cuya cobranza directa se halle á cargo de la misma administracion, pues en los demás esta facultad es de la competencia y obligacion de los alcaldes de los pueblos como queda dispuesto.—Art. 10. No se hará novedad en el sistema establecido por las disposiciones del cap. 8.º del citado Real decreto de 23 de Mayo de 1845 para el apremio de egecucion contra los recaudadores, que son responsables directos á la hacienda del importe de las contribuciones cuya cobranza les está encomendada, entendiéndose comprendidos en este caso los ayuntamientos que asimismo lo verifican con arreglo á la declaracion que contienen los arts. 10 y 11 de la Real disposicion de 3 de Setiembre de 1847.—Art. 11. Las dietas y costas que se devenguen en los apremios contra los ayuntamientos y recaudadores, como responsables de la cobranza de los impuestos en los casos á que se refiere el artículo anterior, se señalarán y exigirán con sujecion á lo dispuesto en el cap. 8.º del espresado Real decreto, sin que en ningun caso ni bajo pretexto alguno, se hagan recaer sobre los primeros contribuyentes.

126. **JUSTICIA.**—En 30.—*Bienes en que tenga derecho cierto ó presunto la hacienda pública. Su administracion.*—R. O. por el ministerio de Hacienda circulada por el de Justicia.—En todos los asuntos en que haya que constituir en administracion bienes raices porque la hacienda pública haya reclamado derechos; se encargue

dicha administracion á la de fincas del Estado , siempre que en ello no se quebranten disposiciones legales , ó pueda hacerse sin inconveniente á juicio prudente de los mismos jueces.

TRIBUNALES ESPAÑOLES.

Pleito seguido en la Habana y terminado en el supremo tribunal de justicia.—En el pleito promovido por Doña Merced Ponce de Leon, sobre nulidad de parte de los testamentos del señor marqués de Aguas Claras, por recurso de injusticia notoria, interpuesto por D. Vicente Bernabeu y Ponce, de sentencia pronunciada por la audiencia pretorial de la Habana, ha recaído la sentencia siguiente, dictada por la sala de Indias del supremo tribunal de justicia: «En el pleito promovido por Doña Merced Ponce de Leon, sobre nulidad de los testamentos de D. Antonio Ponce de Leon, primer marqués de Aguas Claras, en la parte en que dispuso de los bienes de su hermano D. Francisco, primer conde de Casa-Ponce, pendiente ante nos por recurso de injusticia notoria, interpuesto por D. Vicente Bernabeu y Ponce, de la sentencia de revista pronunciada por la audiencia pretorial de la Habana en 26 de Octubre de 1846, en cuanto con revocacion de la de primera instancia declaró nula y de ningun valor la institucion hecha por el citado marqués de Aguas Claras á favor del D. Vicente Bernabeu, en el testamento de 22 de Junio de 1833, en cuyo pleito comparecieron en esta superioridad, impugnando el espresado recurso Doña Luisa Bernabeu y Ponce, hermana del D. Vicente, y representada por su marido D. Tomás de Briones, los hijos menores de D. Ramon Bernabeu, tambien su hermano, representados por el curador *ad litem*, y Doña Antonia María, D. Santiago y D. Francisco Ponce de Leon, hermanos, y el segundo, actual conde de Casa-Ponce, por sí, y como albacea y heredero del primer conde del mismo título, vecinos todos de la espresada ciudad de la Habana.—Visto:—Fallamos no haber lugar al mencionado recurso de injusticia notoria; en su consecuencia, condenamos á D. Vicente Bernabeu y Ponce en las costas y en la pérdida de los 15,000 reales depositados, los que se distribuirán en la forma ordinaria. Por esta nuestra sentencia definitiva, así lo pronunciamos, mandamos y firma-

mos en Madrid á 17 de Julio de 1850.—Francisco Olavarrieta.—José de Mier.—Manuel Antonio Caballero.—Gregorio Barraicoa.—José Cecilio de la Rosa.—Diego Martinez de Villodres.—Manuel Barrio Ayuso.—Francisco Agustin Silvela.—José Francisco Moréjon.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.—*Sentencia*.—En el pleito entre partes, de la una el curador *ad litem* de D. Vicente Dasí y Lluesma, y de la otra D. José Maria de Arróspide, en concepto de marido de Doña Maria de los Dolores Sanceliment, marquesa de Serdañola, vecinos de la ciudad de Valencia, sobre mejor derecho á la mitad de los bienes vinculados que poseyó D. Giner Perellós, marqués de Dos aguas, pendiente ante nos por recurso de nulidad interpuesto por el curador del D. Vicente Dasí de la sentencia de revista dada por la sala segunda de la audiencia de Valencia en 25 de Enero de este año, por la cual, supliendo y enmendando la de vista que confirmó la de primera instancia, absuelve al D. José Maria de Arróspide, en el concepto indicado, de la demanda propuesta por dicho curador *ad litem*: Visto.—Teniendo presente que la referida sentencia de revista se funda únicamente, segun aparece del informe de la sala que le dictó, en que la ley de desvinculacion decretada en 27 de Setiembre de 1820, sancionada el 10 de Octubre siguiente, y publicada en las córtes el dia 11 del mismo mes y año, no regía en Valencia en 21 de Octubre de 1820, en que falleció D. Giner de Perellós.—Considerando que la ley de 19 de Agosto de 1841, dictada para declarar los efectos que debieron tener principalmente la ley de desvinculacion de 1820; el Real decreto de 1.º de Octubre de 1823, que anuló todos los actos del Gobierno constitucional, y el de 30 de Agosto de 1836, que restableció aquella, reparando en lo posible los perjuicios causados y conciliando hasta donde fuese dable los diversos derechos legítimamente adquiridos, no podia prescindir de reconocer, y atendido su carácter especial, de determinar el principio y el fin de cada una de las épocas en que rigieron aquellas disposiciones contradictorias; ya estableciendo plazos constantes y uniformes para toda la monarquía, ora refiriéndose espresamente al momento en que cada una de ellas hubiese adquirido el carácter de obligatoria en cada punto. Considerando que la citada ley de 19 de Agosto de 1841

reconoce y declara que los Reales decretos de 1.º de Octubre de 1823 y 30 de Agosto de 1836 empezaron á regir desde el dia de sus respectivas fechas; y que, consecuente con un mismo propósito, lejos de reconocer y declarar que la de desvinculacion de que se trata principió á producir sus efectos desde el dia en que hubiese sido publicada en cada capital de provincia, ó en cada uno de los pueblos del Reino, reconoce y declara literalmente en sus artículos 4.º, 5.º, 9.º y 10; sin hacer distincion ni exclusion de ningún pueblo, que el periodo en que debió producir sus efectos fue desde 11 de Octubre de 1820 hasta 1.º de Octubre de 1823. Considerando que esta declaracion del periodo en que rigió, y por necesidad del dia en que empezó á regir la de 11 de Octubre de 1820, es esplicita terminante, posterior á todas, especial y concretada á dicha ley, no pudiendo por tanto sobreponerse á su precepto ninguna otra declaracion general dictada en la anterior época constitucional, ó en la presente, sobre el momento en que deban, por lo comun y de ordinario, empezar á regir las leyes: que por tanto en la sentencia de 25 de Enero de este año de la sala segunda de la audiencia de Valencia se ha infringido la mencionada ley de 19 de Agosto de 1841. Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al expresado recurso de nulidad, y de ningún valor ni efecto la referida sentencia de revista de 25 de Enero de este año, y mandar, como mandamos, se devuelvan los autos á dicha audiencia para lo que previene el artículo 18 del Real decreto de 4 de Noviembre de 1838; y en el caso de no haber en ella suficiente número de ministros hábiles para conocer de este negocio, los pasará á la audiencia mas inmediata; y asimismo mandamos se alce el depósito constituido para la admision del recurso. Y por esta nuestra sentencia definitiva, que se publicará en la *Gaceta* del Gobierno, y de la que se remitirá por duplicado copia certificada al ministerio de Gracia y Justicia, así lo declaramos, mandamos y firmamos.—José María Manescau.—Ramon María Fonseca.—Gregorio Barraicoa.—José Celino de la Rosa.—Manuel Barrio y Ayuso. José Francisco Morejon. Publicacion.—Leida y publicada fue esta sentencia por el Excmo. señor D. Francisco Agustin Silvela, ministro del tribunal supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su sala segunda hoy 17 de Julio de 1850, de que certifico como secretario de la Reina nuestra señora y de cámara de dicho supremo tribunal.—Agustin Montijano.

LEGISLACION ADMINISTRATIVA.

CONSEJO REAL.

Ley de organizacion y atribuciones del consejo Real decretada por S. M. la Reina en 6 de Julio de 1845.

TÍTULO 1.º—De la organizacion del consejo.—Art. 1.º Para la mejor administracion del Estado se establece un cuerpo supremo consultivo con el nombre de *consejo Real*.—Art. 2.º El consejo se compondrá: 1.º De los ministros secretarios de Estado y del despacho. 2.º De 30 consejeros ordinarios. 3.º De los consejeros estraordinarios que el rey autorice para tomar parte en las deliberaciones del consejo. 4.º Del número de auxiliares del consejo que sean necesarios. 5.º De un secretario general. Tendrá además los empleados y dependientes que los reglamentos determinen.—Artículo 3.º El presidente del consejo de ministros presidirá el consejo Real, y en su defecto el ministro de mas edad entre los que se hallen presentes. El rey nombrará á uno de sus consejeros ordinarios para el cargo de vice-presidente.—Art. 4.º Los consejeros ordinarios serán nombrados por el rey á propuesta del consejo de ministros y en decretos especiales refrendados por el presidente del mismo consejo. Para su separacion se observarán las mismas formalidades.—Art. 5.º Para ser nombrado consejero ordinario se necesita tener 30 años cumplidos de edad y haberse distinguido notablemente por sus conocimientos y servicios en las diversas carreras del Estado. Este cargo es incompatible con cualquiera otro empleo efectivo.—Art. 6.º Los consejeros ordinarios tendrán el tratamiento de ilustrísima, 50,000 rs. de sueldo y el distintivo que se determine.—Art. 7.º Los consejeros estraordinarios serán nombrados en la misma forma que los ordinarios. Este nombramiento solo podrá recaer en los funcionarios siguientes: 1.º Presidente, ministros y fiscales del tribunal supremo de Justicia, del de Guerra y Marina, del tribunal mayor de cuentas y del de la Rota de la Nunciatura. 2.º Inspectores generales de todas armas. 3.º Subsecretarios de los ministerios. 4.º Comisario general de Cruzada. 5.º Directores generales de cualquier ramo de la administracion pública. 6.º Intendente general del egército. 7.º Con-

tadores generales. 8.º Comisarios régios de los bancos de San Fernando y de Isabel II. 9.º Presidente y vocales de la junta de direccion de la armada.—Art. 8.º Los consejeros extraordinarios no podrán asistir al consejo ni tomar parte en sus resoluciones sino en virtud de autorizacion del rey, dada por punto general, al principio de cada año: los no comprendidos en esta autorizacion cesarán de hecho de asistir á las sesiones. El número de los consejeros extraordinarios autorizados en esta forma no excederá en ningun caso de las dos terceras partes de los ordinarios.—Art. 9.º Los consejeros extraordinarios entenderán solamente en los asuntos no contenciosos de la competencia del consejo.—Art. 10. Los auxiliares ayudarán al consejo en todos sus trabajos. La intervencion que han de tener en ellos y la forma en que han de ejercerla se determinarán por un Real decreto. Las dos terceras partes de los auxiliares serán letrados.

TÍTULO 2.º — De las atribuciones del consejo.—Art. 11. El consejo Real deberá ser siempre consultado: 1.º Sobre las instrucciones generales para el régimen de cualquier ramo de la administracion pública. 2.º Sobre el pase y retencion de las bulas, breves y rescriptos pontificios y de las preces para obtenerlos. 3.º Sobre los asuntos del Real patronato y recursos de proteccion del Concilio de Trento. 4.º Sobre la validéz de las presas marítimas. 5.º Sobre los asuntos contenciosos de la administracion. 6.º Sobre las competencias de jurisdiccion y atribuciones entre las autoridades judiciales y administrativas, y sobre las que se susciten entre las autoridades y agentes de la administracion. 7.º Sobre todos los demás asuntos que las leyes especiales, Reales decretos ó reglamentos sometan á su exámen.—Art. 12. Dará además su dictámen el consejo siempre que los ministros juzguen conveniente oírle.

TÍTULO 3.º — Del modo de proceder en los asuntos administrativos.—Art. 13. El consejo Real conocerá de los asuntos administrativos de su competencia en consejo pleno, ó por medio de las secciones en que estará dividido. Un Real decreto determinará los asuntos que deban someterse respectivamente á la deliberacion del consejo pleno ó de las secciones.—Art. 14. Para que el consejo pleno pueda deliberar, se necesita la presencia de 15 consejeros sin contar en este número á los ministros que asistan.—Artículo 15. Las secciones en que estará dividido el consejo serán aná-

logas á los negocios correspondientes á los respectivos ministerios. Un Real decreto determinará su número, organizacion y atribuciones.

TÍTULO 4.º—Del modo de proceder en lo contencioso.—Artículo 16. Para instruir los expedientes y preparar las resoluciones del consejo en los asuntos contenciosos habrá, además de las secciones enunciadas en el título anterior, una especial, compuesta de cinco consejeros ordinarios, un fiscal y dos abogados fiscales con el número de auxiliares letrados que los reglamentos determinen. Esta organizacion podrá variarse por un Real decreto, siempre que lo exija el mejor servicio.—Art. 17. Los asuntos contenciosos se verán á puerta abierta, y se oirá á los defensores de las partes en la forma que se determine. Las deliberaciones no serán públicas: los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos.—Artículo 18. El Real decreto que en vista del dictámen del consejo recayere, será leído públicamente en consejo pleno, y terminará el punto litigioso.—Art. 19. El Gobierno queda autorizado para resolver todas las dudas que pueda ofrecer el cumplimiento de esta ley.

Real decreto de 22 de Setiembre de 1843, sobre organizacion y atribuciones del mismo consejo.

Artículo 1.º Los nombramientos de los consejeros Reales serán refrendados y espeditos por el presidente del consejo de ministros, y se comunicarán al de la Gobernación de la Península.—Art. 2.º El consejo de ministros propondrá á S. M. al principio de cada año el estado de los consejeros extraordinarios que deberán ser autorizados para tomar parte en las deliberaciones del consejo: los que no estuvieren comprendidos en aquel estado dejarán desde el momento de su publicacion de formar parte de aquel cuerpo.—Art. 3.º Los auxiliares del consejo serán por ahora 40, de los cuales 25 deberán ser letrados. Se dividirán en tres clases: los de primera tendrán 20,000 rs. de sueldo; los de segunda 12,000 y 8,000 los de tercera. El número y clase de los auxiliares del consejo podrá variarse segun las necesidades del servicio.—Artículo 4.º Los auxiliares se distribuirán entre las diferentes secciones del consejo Real; instruirán los expedientes de que las mismas de-

ban conocer; propondrán la resolucion conveniente para aquellos en que especialmente se les encargue este trabajo, y tendrán voz consultiva en la respectiva seccion cuando discuta los asuntos que hubieren despachado.—Art. 5.º El secretario general tendrá á su cargo todo lo concerniente al consejo pleno y su organizacion; distribuirá los trabajos y llevará la correspondencia general. Su nombramiento y el de los empleados y dependientes de secretaria se expedirá por el ministerio de la Gobernacion de la Península.—Art. 6.º Cada seccion tendrá su secretario particular, cuyo nombramiento se hará por el ministerio respectivo. Las atribuciones de estos secretarios se determinarán en el reglamento especial de las secciones.—Art. 7.º Además de los casos espresados en la ley, el consejo Real será consultado por punto general: 1.º Sobre los reglamentos generales para la egecucion de las leyes. 2.º Sobre los tratados de comercio y navegacion. 3.º Sobre la naturalizacion de estrangeros. 4.º Sobre conceder autorizacion á los pueblos y provincias para litigar, cuando esta clase de asuntos deban ser decididos por el Gobierno. 5.º Sobre los permisos que pidan los pueblos ó provincias para enagenar ó cambiar sus bienes, y para contratar empréstitos. 6.º Sobre las autorizaciones que con arreglo á las leyes deba dar el Gobierno para encausar á los funcionarios públicos por escesos cometidos en el egercicio de su autoridad.—Art. 8.º Podrá tambien ser consultado el Consejo cuando los ministros estimen conveniente oir su dictámen: 1.º Sobre los proyectos de ley que hayan de presentarse á las córtes. 2.º Sobre los tratados con las potencias estrangeras y concordatos con la Santa Sede. 3.º Sobre cualquier punto grave que ocurra en el Gobierno y administracion del Estado.—Art. 9.º Corresponde al consejo pleno conocer: 1.º De los proyectos de ley. 2.º De las instrucciones y reglamentos generales. 3.º De los tratados y concordatos. 4.º De la resolucion final en los asuntos contenciosos. 5.º De la validéz de las presas marítimas. 6.º De las competencias de jurisdiccion y atribuciones entre las autoridades judiciales y administrativas. 7.º Del pase y retencion de las bulas, breves y rescriptos pontificios de interés general, y de las preces para obtenerlos. 8.º De los asuntos graves del Real patronato y recursos de proteccion del concilio de Trento. 9.º De los demás asuntos en que el Gobierno quiera oir al consejo pleno.—Art. 10. Las seccio-

nes en que se dividirá el consejo para los asuntos administrativos, serán : Estado, Marina y Comercio, Gracia y Justicia, Guerra, Gobernacion, Hacienda, Ultramar. Esta division podrá alterarse conforme lo exijan las necesidades del servicio.—Art. 11. Las secciones serán presididas por el ministro del ramo respectivo; si concurriesen dos presidirá el de mas edad. Cada seccion tendrá además un vice-presidente nombrado por el rey, á propuesta del ministro respectivo, de entre los vocales de la misma.—Art. 12. Las secciones instruirán los espedientes relativos á los negocios de su competencia, y acordarán el informe que hubieren de dar al Gobierno en los asuntos sobre que hayan sido consultadas.—Artículo 13. En el propio modo instruirán los espedientes, y prepararán el informe que hayan de presentar al Consejo sobre los asuntos de que deba conocer en pleno.—Art. 14. La seccion de Gracia y Justicia instruirá además los espedientes, y preparará la resolución sobre la validéz de las presas marítimas y sobre las competencias de jurisdiccion y atribuciones entre las autoridades judiciales y administrativas. Tambien tendrá á su cargo la coleccion y clasificacion de las leyes, decretos, Reales órdenes y reglamentos vigentes.—Art. 15. La seccion de Ultramar será siempre oida en todos los asuntos relativos á aquellas provincias y á su régimen especial en la forma que determinará el reglamento particular de esta seccion.—Art. 16. Podrán reunirse dos ó mas secciones para despachar un asunto, siempre que la naturaleza de este lo exigiere.—Art. 17. La seccion de lo contencioso conocerá de los asuntos de la administracion que tengan este carácter, y de las apelaciones de los consejos provinciales. La instruccion de los negocios en esta seccion se hará conforme á un reglamento especial.

TRIBUNALES ESTRANEROS.

Causa contra Roberto Paté, acusado de haber herido á la
Reina Victoria.

El baron Alderson al hacer saber al reo el veredicto del jurado mediante el cual se le condenó á siete años de destierro en Ultramar, le dirigió la alocucion siguiente:

El jurado os ha declarado culpable despues de una deliberacion larga y detenida, y no hay razon para creer que se haya equivocado; pero como al mismo tiempo se ha demostrado que sois una persona de costumbres muy escéntricas y diferente en cierto modo de los demás hombres, y que es probable que haya querido Dios enviaros una alliccion mental, mereceis alguna compasion. Sin embargo, la accion que habeis cometido tiene un carácter muy sério é importante. Habeis sido declarado culpable de haber herido á una muger, lo que ya para un militar era un acto muy vergonzoso; pero si se reflexiona que esta muger es vuestra soberana, que su persona tiene derecho al respeto de todo el pais por sus virtudes y su alta posicion, semejante acto, que en un caso ordinario seria de una ofensa muy seria, llega á ser en esta ocasion un hecho verdaderamente monstruoso. ¿Cómo habeis podido, vos, soldado del pais, insultar á la que todo el mundo ama, no solamente á causa de su rango elevado sino tambien á causa de sus virtudes privadas? Pero no os habeis limitado á un insulto, sino que la habeis golpeado.

En consideracion al rango de vuestra familia y á vuestra propia posicion, el tribunal no ha querido imponeros la vergonzosa pena de los azotes. El tribunal os guarda esta consideracion, á pesar que no la habeis tenido con los demás. Sin embargo, debeis ser juzgado de tal suerte, que quedeis imposibilitado por mucho tiempo de cometer otra mala accion.

Quisiera yo poder pensar que no estabais en vuestro juicio cuando cometisteis este acto, porque hace mucho tiempo que este pais se ha lisongeadado de que nadie era capáz de atentar contra la persona de su soberana; pero debo creer que el jurado ha obrado en justicia no absolviéndoos como demente. De todo lo que prece-de, resulta para mí el deber de condenaros á siete años de deportacion en Ultramar.

Roberto Paté oyó esta sentencia sin revelar la mas ligera emocion.

Causa contra el doctor Webster sobre el asesinato del doctor Parkman.

Los periódicos de los Estados-Unidos han ocupado gran número de sus columnas con los pormenores de la causa seguida al doctor Webster por el asesinato cometido en la persona del doctor Parkman. Las circunstancias, verdaderamente horribles, que acompañaban á este suceso, antes que el asesino confesase de plano su delito, como lo ha hecho despues de ser sentenciado á la capital, eran dignas de llamar la atencion general. Nuestros lectores lo conocerán así cuando lean la declaracion del doctor Webster, y reflexionen los comentarios á que daria lugar la aparicion de los miembros de la víctima esparcidos por diferentes puntos y tostados muchos de ellos. Esta confesion fue presentada al tribunal que conocia de la causa por el reverendo doctor Putnam, encargado de prestar al preso desde el momento en que fue sentenciado á la última pena todos los ausilios espirituales que proporciona á los mortales la religion cristiana. El reverendo doctor Putnam, al presentar la confesion escrita del reo, pidió en nombre de éste, no el perdon absoluto, como se habia solicitado antes, sino la conmutacion de la pena de muerte en la inmediata, que es la de encierro perpétuo.

He aquí la confesion del reo:

El martes 20 de Noviembre de 1849, dirigí una esquila al doctor Parkman, que parece fue conducida por el muchacho Maxwell. La entregué á Littlefield sin cerrar. En ella pedia al doctor Parkman que pasase á mi estudio el viernes 23, despues de concluida mi clase. (Se continuará.)

Ingreso de Abogados en el Colegio.

En Junio.—D. Celestino Losilla y Garoz.

En Julió.—D. Joaquin Pardo de la Casta.

D. Ramon Guerrero de Luna.